

Guillermo Bustamante Vera

Pacto por la paz

La muerte de Arturo Beltrán ha dado un respiro a la popularidad del gobierno federal. En los días próximos los estudios de opinión darán mayores detalles al respecto; sin embargo, la raíz del problema sigue ahí y antes de que los noticieros dejen de dar pormenores sobre el operativo que llevó a los marines hasta la morada de uno de los mayores *capos* en la historia de México, en el mundo subterráneo las piezas se volverán a acomodar para producir, distribuir y comercializar la droga, así como retomar los negocios paralelos como el secuestro, la extorsión, la piratería, entre otros, que tienen al país entero entre el miedo, el acecho y el crimen.

Es claro, mientras el negocio de las drogas mantenga esas tasas de ganancia habrá gente dispuesta a poner en juego su propia vida. Y con ellos se va formando una cadena de policías, ministerios públicos, soldados, propietarios de pequeños negocios de abastecimiento, jóvenes distribuidores, jueces, entre una inmensa gama de individuos que

simplemente responden a una lógica de rentabilidad monetaria y poder.

Revertir esta situación implica un esfuerzo enorme. Hoy las estructuras sociales se encuentran seriamente lastimadas por la criminalidad y la corrupción. Y por supuesto que de ello también es responsable un Estado que, en medio de la transición política, no atina en ubicar sus funciones.

De ahí que primeramente se requiera firmar un acuerdo de unidad con todas las fuerzas políticas para hacer frente a la criminalidad y a la drogadicción en nuestro país. Este tema no debería tener distingos partidistas porque la vulnerabilidad en la que se encuentra el país perjudica a todos, aunque la responsabilidad de esta guerra fallida haya recaído sólo en el titular del Ejecutivo por la torpeza de éste al ponerse al frente del Ejército cual si se tratara de un enemigo extranjero.

Un acuerdo como el que se requiere debe tener una visión multidisciplinaria, pues si bien las balas por sí mismas han demostrado ser insuficientes para aca-

bar con el trasiego y venta de drogas, y ni qué decir de las otras actividades criminales, sin el combate frontal otras medidas de corte social y jurídico dejarían vulnerable a la sociedad y al propio Estado. Además de la eficacia que podría derivar de ver el problema en todas sus dimensiones, da pie a la inclusión de las distintas visiones políticas tan necesarias para sustentar el acuerdo político.

Quizá el reto mayor es el que significa combatir la impunidad, pero es tan importante porque hoy el crimen organizado puede burlar tan fácilmente el sistema de justicia que cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar, está tentado a traspasar la frontera de la legalidad por dinero o por poder, incluso aquellos que siendo electos para asegurar la legalidad y la seguridad desde un puesto público han traicionado a los ciudadanos.

Hasta el momento, las reformas en materia de justicia y seguridad enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo, sólo han confirmado esta visión bélica contra el crimen organiza-

do, dejando de lado todo el proceso judicial que se hace indispensable para investigar a los detenidos, juzgarlos conforme a derecho y evitar que los juzgados sean la burla de los delincuentes. Incluso, es necesario retomar las críticas al sistema penitenciario, ciertamente universidades del crimen en vez de reformatorios de individuos para su readaptación social.

Habrà quien le apueste al fracaso de este gobierno y se conforme sólo en lanzar sus críticas cual dardos envenenados. Habrà quien prefiera mantener sus privilegios y dejar que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el titular del Ejecutivo. Ciertamente el presidente apostó donde no debía y quizá lo siga haciendo por torpeza. Lo cierto es que México vive un momento dramático que no podrá ser borrado ni al paso de muchas décadas, después de lo cual quedarán estos años como una cicatriz burda, que quizá sólo nos recuerde de la anarquía de un país en cambio. ☒

Economista

